Bogotá D.C.

Señores
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
(REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA POR DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL (VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO)

De la negación al acceso oportuno de justicia (falta de legitimación en causa por activa pasiva y prescripción de la acción)

ACCIONANTE: DARIO GILBERTO HERNADEZ LLOREDA

ACCIONADO: INSPECCION 9E DE POLICIA DE BOGOTA

DARIO GILBERTO HERNADEZ LLOREDA, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma ,en base al artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por este escrito formulo acción de tutela contra INSPECCION 9E DE POLICIA DE BOGOTA, a fin de que se protejan dentro de un plazo prudencial los derechos fundamentales al debido proceso y los derivados de la presente acción, POR DEFECTO MATERIAL, SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL dado que las autoridad ADMINISTRATIVA accionada desconoció la aplicación de los derechos que me asisten, en lo actuado en la querrella policiva por perturbación a la posesión número R-2008-1532, que se surtió en el despacho de la INSPECCION 9E DE POLICIA DE BOGOTA de la decisión acusada y el actuar procesal por estar incurso en vicios o defectos que se constituyen en causales específicas y genéricas de procedibilidad, en las cuales sustento de manera específica en la acción de tutela a saber en base a los siguientes:

DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

Conforme la línea jurisprudencial en la materia, el defecto sustantivo se le atribuye a una decisión judicial cuando ella se edifica a partir de fundamentos de derecho inaplicables al caso concreto. También, cuando se define sin la observancia de los sustentos normativos correspondientes o con base en "una interpretación que

contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica". En términos generales se presenta "cuando, en ejercicio de su autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación la Constitución o la ley". Estas hipótesis se configuran en los eventos en los cuales:

"(i) (...) la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso;(ii) (...) el funcionario realiza una 'aplicación indebida' de la preceptiva concerniente; (iii) (...) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) (...) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática;// (v) (...) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada; (vi) (...) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador."

El defecto sustantivo se erige como una limitación al poder de administrar justicia y a la autonomía e independencia judicial que, en el marco del Estado Social de Derecho, vincula la interpretación judicial a los principios y valores constitucionales, así como a las leyes vigentes. Su desconocimiento, en la medida en que comprometa los derechos fundamentales, habilita la intervención del juez constitucional para su protección. En consecuencia, si bien:

"el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral, Comercial, etc. [...] en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente (...) [su] intervención (...). En este caso, el juez de tutela tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del Derecho Constitucional de los derechos

fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada"

el defecto sustantivo implica la generación de un yerro en la aplicación del derecho y, por su trascendencia, el desconocimiento al debido proceso de las partes, a causa de la elección de fuentes impertinentes o de la omisión de normas aplicables, que bien pueden surgir de las reglas jurisprudenciales que rijan la materia.

HECHOS

1. la señora ANA JULIA FORERO DE MENDOZA (Q.E.P.D) identificado con cédula de ciudadanía número 20.078.781 presenta querrela por perturbación a la posesión POR OCUPACION DE VIA DE HECHO EN EL AÑO 2008 con mayor precisión el día 23 de octubre de esa anualidad, en contra de personas indeterminadas.
2. Posteriormente se le asigna conocimiento a la inspección 9E primera de Bogotá la cual acepta los términos y las condiciones mediante las cuales el querellante aduce una supuesta perturbación a la posesión por vía de hecho basado en el artículo 15 de la ley 57 de 1905 del código nacional de policía de la época donde la fallecida querellante afirma tener una posesión material del inmueble ubicado en la carrera 107 No. 17B- 52 desde el año 1998 hasta unos días anteriores a la presentación de la querrela objeto de la presente .
3. El querellante no tiene claro según los antecedentes expuestos ante el despacho de cuándo se hizo la supuesta ocupación clandestina del predio es decir que en su presunción y mala fe aduce que una ocupación por vía de hecho por que según esta habían unos arrendatarios y ocupamos el inmueble de manera clandestina, hecho notorio en dicha afirmación y antecedente expuesto por el mismo despacho policivo el cual hace de notar que el querellante no ha tenido la posesión material del previo ni cumple con los requisitos del artículo 762 del código civil partiendo de esta premisa la ley es clara y expresa

la posesión debe ser material ejercer el ánimo de señor y dueño para ser materialmente poseedor es decir tener la aprensión física de la cosa cómo enmarca la ley.

4. Al despacho se aportaron pruebas documentales las cuales se pueden cotejar y evidenciar que la señora querellante jamás ha ejercido una posesión pública ininterrumpida del inmueble, aunque suscite unas declaraciones que no cumplen con los requisitos de declaración extraprocesal, ni el supuesto declarante comparece al despacho en el desarrollo de todo el proceso policivo a afirmar en prueba testimonial que lo escrito por él es verídico, no se sabe a la fecha la naturaleza de este y solo habla de conocer de la señora querellante pero no manifiesta la fecha de ocupación o fecha en la que tuvo conocimiento de los hechos, la ley específicamente dentro del proceso que el despacho de la inspección de policía 9c de Fontibón, facultades para conocer deben probarse más allá de las presunciones y supuestos de facto deben ser probado en manera fáctica real y jurídica que hubo una ocupación por vía de hecho según lo estipulado el artículo 15 de la ley 57 de 1905 y la indebida calificación probatoria y normativa e incluso el análisis arbitrario y por no decir de manera contundente sesgado y parcializado de la inspección en mención hace de notar que el despacho excede las funciones y desconoce categóricamente la norma y sus elementos taxativos.
5. El personero de la localidad emite concepto puntual en donde manifiesta la improcedencia de la querrela instaurada por falta de requisitos sustanciales y procedimentales en el folio 43 y 44 exponiendo los yerros procesales y sustanciales y reitera la posición como reposa en los folios del 52 al 63, en donde el ministerio publico manifiesta que el apoderado de la misma querellante manifiesta que no ha ejercido actos positivos de posesión
6. Que es evidente dada la manifestación dentro de la misma querrela que hace el apoderado de la querellante para justificar la simulación del arriendo y la apertura de un proceso de restitución de inmueble

buscando inducir al error a la jurisdicción para obtener una entrega por vía judicial en restitución de un contrato simulado a toda luz y cito.

"mi mandante no suele acercarse al inmueble arrendado, precisamente para no entorpecer el derecho que les asiste a los inquilinos, para tener el libre goce del inmueble arrendado, motivo por el cual no se entero la fecha en el que lo desocuparon y menos aun menos aun la fecha en la cual ingresaron las personas que actualmente lo ocupan."

Entonces cabe anotar que la posesión no existió, no fue detentada jamás por la querellante la señora ANA JULIA FORERO DE MENDOZA (Q.E.P.D)

Que para la época existía un proceso de restitución de inmueble arrendado del cual parte de un contrato que no fue debidamente probado y a toda luz se ve la simulación del mismo para obtener la entrega de un predio por medio de restitución de inmueble arrendado induciendo al error a la jurisdicción para beneficiarse de manera fraudulenta.

7. De otro lado, la declaración dada por el señor HERNANDO GONZALEZ, obrante a folio 11. la que no cumple con los requisitos de una declaración extra proceso, por lo que no se cumple con lo reseñado en el artículo 3° del Decreto 992 de 1930, pues no se enuncia la fecha de la ocupación o la fecha que tuvo conocimiento, lo que correspondería dar aplicación al artículo 5° ibidem.

Por lo que aquí la querellante, no está legitimada para incoar la acción, puesto que si bien es cierto, que se dice que es poseedora del bien, también lo es, que ésta la a trasferido a varios tenedores mediante contrato de arrendamiento, estando pendiente que resuelva la jurisdicción el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, según el texto petitorio tenía un contrato de arrendamiento que a partir del mes de abril de 2007 no se cancelaron cánones de arrendamiento, cabe resaltar que la fallecida querellante vivía a dos a casa del inmueble objeto de la presente hecho notorio de que no podría suscitarse

el desconocimiento de algún hecho perturbador de la posesión.

8. El despacho en mención desconoce el concepto de la personería sigue con el exabrupto procesal de continuar la querrela siendo muy puntuales los requisitos de forma, dentro de los cuales se ciñe a los requisitos procedimentales como identificación de partes, y no evalúa los de fondo como la legitimación en causa ni cuando fue interpuesta, ni cuando fallece la querellante sin tener competencia para tomar decisiones tales como la de declarar sucesora a una hija de la querellante dentro del proceso para su continuidad así lo hace sin tener en cuenta el presupuesto de norma y la competencia y los límites de competencia que ella le designa, el inspector no es juez de conocimiento y no tiene facultades designadas de manera directa o delegada por otras normas para dar continuidad de la forma en que este lo hizo a la sucesora hija de la querellante se saltó todos los presupuestos procesales.

9. Posterior a todo esto la inspección de manera arbitraria y tomándose competencias que no le asisten jurídicamente reconoce sin previo auto o sentencia la sucesión de la señora querellante que declare u ordene que sea sucesora la hija de la fallecida sabiendo que la norma asigna competencias para dichos fines que no recae en sus funciones o recaían en la época de la instauración de la querrela objeto de la presente.

10. Dentro de los hechos que suscitan la legitimación de la querellante afirma que existía un proceso de restitución de inmueble en contra de un tercero el cual no era el poseedor y trata de enmarcar los hechos de mala fe, allegando un contrato y la demanda de restitución que en su momento no tenía sentencia cosa que no ajusta con la realidad, es claro que lo que pretendía era hacerse restituir una cosa que no es de su titularidad ni estaba autorizada por ningún titular de derecho de dominio y/o poseedor del inmueble objeto de la querrela.

11. La querellante ya fallecida, residía a dos casas del predio objeto de la presente y dado la cercanía y por demás lo hechos notorios al momento de instaurada la querella, no solo la falta de legitimación en causa si no también la caducidad de la oportunidad para instaurar la querella, como se puede deslumbrar de manera notoria.
12. El hecho de la demanda de restitución de inmueble arrendado bajo el radicado **11001400305420070069800** que cursaba en el juzgado 54 civil municipal de Bogotá, hace presumir en la sana crítica de este accionante que era una maniobra procesal para poder entrar al inmueble creando un escenario de entrega del mismo bajo un manto de "legalidad" simulado de mala fe, induciendo a la jurisdicción al error para obtener sentencia de un hecho espurio para perjudicar el derecho que asiste a los poseedores materiales del inmueble
13. En primera medida y por requisito sustancial y procedimental dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado es que la cosa solicitada en restitución se encuentre a quien se le solicita dicha restitución es decir al arrendatario la querellante en su momento exhibe un documento el cual si bien puede tener presunción de legalidad por el objeto y causa lícita no se ajusta a la realidad plausible, ya que no ostenta la posesión material del inmueble ni por ocupación propia ni por el supuesto arrendatario tratando de configurar el ánimo de señor y dueño desde el usufructo.
14. Las pruebas testimoniales no muestran más que la que se recalca que los supuestos de hecho y de la prueba que se aporta dentro de las diligencias no dan la certeza de que sea real el arrendamiento con el que se supone prueba la querellante su posesión, queda probado el hecho que no se perturbo algo que nunca se ha tenido el modo de ingreso y el contrato mediante el cual se adquiere los derechos de posesión del predio objeto del presente por parte de los querellados.

15. el Despacho desconoce mis actos de señor y dueño la posesión, el tiempo que se ha poseído el predio y las características del modo de adquisición por lineamiento de la norma evidencia que no existe actos perturbatorios por vías de hecho, ya que la posesión ha sido publica, pacífica e ininterrumpida desde enero de 2008 como se a probado dentro de la querella objeto de la presente existe un contrato de compraventa de derechos de posesión y mejoras con presentación personal que corrobora la fecha de la celebración y entrega material de la posesión del inmueble, caso contrario al que evidencia los actos expresados por la querellada que carecen de pruebas de sustento factico de lo expresado y lo actuado.
16. Desconoce que su competencia dentro de la querella instaurada es probar que se perturba la posesión dentro de los presupuestos del artículo 15 de la ley 57 de 1905 del código nacional de policía de la época donde la fallecida querellante afirmo tener una posesión material del inmueble ubicado en la carrera 107 No. 17B- 52 desde el año 1998 hasta unos días anteriores a la presentación de la querella objeto de la presente, cosa que no es cierta.
la caducidad de la acción es evidente a la luz de la norma Los requisitos para incoar esta acción son: ser poseedor material o tenedor del inmueble; haber ejercido dicha calidad por un periodo de tiempo igual o superior a seis (6) meses; existencia del acto perturbatorio, que para el caso es la ocupación de hecho y que la ocurrencia de este no sea superior a seis (6) meses. El procedimiento es el contemplado a partir del artículo 397 y siguientes de la Ordenanza 018 de 2002.
17. Es decir que para la fecha de la presentación de la querella y teniendo en cuenta que la fallecida querellante viva a menos de una cuadra del predio objeto de la querella no tiene como justificar su aparente posesión y por qué la extemporaneidad de la acción dado que las pruebas aportadas dentro del proceso demuestran que los actos de señor y dueño ejercidos por los querellados llevaban más de un año, y la parte querellante afirma que desde 2007 no le cancelaban el supuesto canon y que no tiene la menor

idea de cuando se dio el supuesto abandono y se desocupo el inmueble objeto del litigio por parte de sus presuntos inquilinos partiendo de las fechas aportadas por la parte querellante los seis meses del término que otorga la norma de impetrar la acción ya habían transcurrido hechos que se reitera en la exposición al despacho de los hechos por parte de los sujetos procesales como se evidencia en los folios del 83 al 92 de la querrela objeto de la presente.

DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL

La presente acción de tutela cumple con los requisitos ordenados para acudir al amparo de los derechos vulnerados toda vez que cuanta con los factores evidentes de vulneración a saber.

- a. el procedimental absoluto (cuando el juez actuó al margen del procedimiento previsto por la ley para adelantar el proceso judicial); -
- b. el fáctico (cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas trascendentales para el sentido del fallo); el material o sustantivo (cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos normativos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene);
- c. el error inducido (cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales);
- d. la decisión sin motivación (debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su determinación);
- e. el desconocimiento del precedente (cuando la jurisdicción ha fijado ya determinado tema y el funcionario judicial desconoce la subregla establecida y afecta, así, el derecho fundamental a la igualdad)

f. la violación directa de la Constitución (cuando se desconoce el principio de supremacía de la Constitución, su carácter vinculante y su fuerza normativa)

en el caso en concreto y dado el análisis esbozado de los hechos me dirijo a su despacho, después de un estudio y proyección de la presente acción que de manera evidente se ajusta a los requisitos constitucionales para recurrir al juez constitucional para hacer la debida protección de los derechos fundamentales vulnerados por dar trámite en su momento a la querrela objeto de la presente por haber ausencia de legitimación en causa por activa y por pasiva, y por demás la prescripción de la acción policiva por los hechos notorios y demostrados y la línea temporal de los hechos accionados por la misma querellante, por otro lado la evidente aplicación indebida de la norma en el caso en concreto adaptando su aplicación a hechos que no son materia de esta norma y por demás los términos fuere o no procedente habían prescrito para iniciar la acción, cosa que manifiesta el ministerio publico y la accionada hace caso omiso.

El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa

OMISION DE LA NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE MANERA ARBITRARIA POR PARTE DEL FUNCIONARIO

1. DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO

A. DEL DESCONOCIMIENTO DE LEGITIMACION EN CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA INDEBIDA PROYECCION PROCESAL

La inspección de policía en el momento de hacer la admisión y calificación en base a la norma para poder iniciar la querrela objeto de la presente determina aun saliéndose de los elementos esenciales de la norma para dar trámite a una perturbación ala posesión enmarcada en el artículo

15 de la Ley 57 de 1905, no es otra cosa que la expresión del poder de policía en cabeza de la autoridad que en su momento ejercía. Lo importante es, en todo caso, afirmar con base en la jurisprudencia, las actividades que con base en la normatividad se desplieguen debe contener todas las garantías propias al debido proceso.

La sentencia C-241 de 2010, de manera expresa regula da una orientación y aplicación de manera mas especializada en la norma y habla manera expresa de la legitimación en causa para iniciar la acción de perturbación a la posesión de la que habla el artículo 15 de la citada ley que posteriormente fue regulada de manera mas especializada por el artículo 125 del decreto ley 1355 de 1970 en los siguientes aspectos

Artículo 15 de la Ley 57 de 1905	Artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970
Supuesto fáctico que origina la acción. Ocupación de hecho de una finca.	Supuesto fáctico que origina la acción. Perturbación de la posesión o mera tenencia sobre un bien.
Legitimación por activa de la Acción. El arrendador. (Art. 15 de la Ley 57 de 1905).	Legitimación por activa de la Acción. El poseedor o tenedor.
Finalidad de la acción. Lanzar al ocupante ilegal. Restablecer el <i>statu-quo</i> .	Finalidad de la acción. Hacer cesar la perturbación. Restablecer el <i>statu-quo</i> .
Defensa del ocupante. El ocupante puede defenderse demostrando que cuenta con un contrato de arrendamiento ó demostrando el consentimiento del arrendador.	Defensa del ocupante. El ocupante puede defenderse justificando legalmente la ocupación (tenencia y posesión).

Dentro de la acción impetrada por la querellante notamos que trata de reclamar un derecho que no le asiste por su calidad afirma que le han perturbado la posesión y dentro de la norma de la época en donde se inicia la querrela objeto de la presente carece de la legitimación en causa por activa porque no tenía la posesión real y material del inmueble, sumado a esto querrela según por que se entero de que le habían perturbado la posesión que no tenia e inicia la acción extemporánea y fuera del término de la norma refreída en la época para iniciar la perturbación a la posesión.

De la comparación efectuada se revelan los siguientes aspectos:

(i.) El artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, establece que la acción policiva se activa a partir de la perturbación de un bien, aspecto que exige establecer cuál es el alcance de dicha expresión. Al respecto, los diccionarios jurídicos definen la perturbación como "el acto de despojo o intento del mismo, contra el legítimo poseedor de la cosa o contra el simple tenedor"[29]. Es decir, la perturbación no se limita de manera exclusiva a actos de origen externo que alteren la tranquilidad de quien ostente el bien a título de tenedor o poseedor, verbigracia las "molestias" o "intentos" de usurpación del inmueble, sino que se extiende al "despojo" como forma de perturbación directa por antonomasia, de donde la "ocupación de hecho", de que trata el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, no es otra cosa que una especie dentro del género "perturbación". En esos términos, la acción policiva prescrita en el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, comporta el supuesto fáctico que se señala en el artículo demandado.

(ii.) En cuanto a la legitimación por activa de la acción policiva, cuando el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 señala al "arrendador" como interesado en la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, debe indicarse que esta calidad puede recaer en el propietario del bien, el poseedor de éste y aún el

mismo tenedor. Dicha identidad se observa en relación con el artículo 125 del Código Nacional de Policía en tanto la acción policiva puede activarla tanto el poseedor como el tenedor. El poseedor como: a) Propietario ("sea que el dueño...tenga la cosa por sí mismo"), b) El que se da por dueño.) y c) El tenedor ("otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él"), es decir, quien detente la tenencia a nombre del dueño o a nombre del poseedor.

Lo anterior es ratificado por las propias normas del Código Civil. Así, la posesión en términos del artículo 762 de dicho estatuto se define como:

"Artículo 762. la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo."

Por su parte, el Código Civil prescribe como tenencia:

"Artículo 765. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño sino en lugar y a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.

Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno."

DE LOS REQUISITOS EXEGETICOS Y SUSTANCIALES ENUNCIADOS EN LA NORMA PARA EL PROCEDER DE LA ACCION POR PERTUBACION A LA POSESION

Artículo 125 del Código Nacional de Policía, que establece que se perturba el derecho de posesión o tenencia que alguien tiene sobre un bien, cuando

por la acción u omisión de un tercero clandestina, arbitrarias e injustamente y sin soporte jurídico no le permite usar, gozar y disfrutar del bien, entorpeciendo su posesión libre y tranquila, es allí donde el Estado interviene como autoridad de policía quien por competencia debe volver las cosas al estadio inicial, es decir, justo antes de que iniciar el acto perturbatorio, ello no significa que a la autoridad de policía le corresponda remover la causa de la perturbación. Sea lo primero establecer cuáles son los presupuestos facticos para el éxito de la acción policiva resumidos así:

- 1). El querellante al momento de los hechos debe demostrar que tenía la posesión o tenencia del bien que reclama en el proceso.

- 2). Que dicha posesión o tenencia le ha sido arrebatada de manera arbitraria, clandestina, y fraudulenta, sin que medie orden de autoridad competente, lo que implica que el querellante no concedió de manera alguna su consentimiento, ni dio permiso al querellado para que ingresar al inmueble

- 3). Que el querellado ha asumido la relación material del bien desplazando al querellante de dicha relación y carece de título que justifique su permanencia en él.

DE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCION ANTE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE PERTURBATORIOS

En consecuencia, tanto el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, como el artículo 125 del Código Nacional de Policía amparan los derechos reales de dominio, posesión y tenencia. Sólo que el artículo 125 citada ampara el dominio vía posesión, sin que sea del caso demostrar o controvertir el derecho de dominio.

Las dos acciones tienen por finalidad corregir la perturbación y restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de que ella se presentare. Es decir, restituir el statu quo. El artículo 15 de la Ley 57 de 1905 logra este propósito a través

de la orden de lanzamiento; en el caso del artículo 125 del Código Nacional de Policía, el restablecimiento se logra a partir de una orden policiva en los términos del artículo 19 del mismo Código, según el cual "para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar órdenes según la competencia que se les atribuya".

En nuestro ordenamiento jurídico existen varios tipos de lanzamiento por ocupación de hecho que se diferencian según las circunstancias mismas de la ocupación, es así como encontramos:

1) Artículo 69 Ley 9 de 1989: Los alcaldes Municipales se encuentran facultados para iniciar la acción policiva en procura a ordenar la desocupación del predio y el lanzamiento de los ocupantes de hecho cuando el propietario, poseedor o tenedor no haya interpuesto la querrela civil de policía siempre que la ocupación atente o pueda representar un riesgo para la comunidad o transgredir las normas urbanísticas o de planeación de la localidad correspondiente. Esta acción fue desarrollada por la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930 subrogado por el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970. El procedimiento de este tipo de lanzamiento es netamente administrativo. 2) Artículo 125 del Decreto 1355 de 1970:

En virtud de la Sentencia C-241 de 2010 el lanzamiento por ocupación de hecho contemplado en la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930, paso a ser una especie dentro del género de las perturbaciones contenidas en el artículo 125 del Código Nacional de Policía. Los requisitos para incoar esta acción son: ser poseedor material o tenedor del inmueble; haber ejercido dicha calidad por un periodo de tiempo igual o superior a seis (6) meses; existencia del acto perturbatorio, que para el caso es la ocupación de hecho y que la ocurrencia de este no sea superior a seis (6) meses. El procedimiento es el contemplado a partir del artículo 397 y siguientes de la Ordenanza 018 de 2002.

Es decir que para la fecha de la presentación de la querrela y teniendo en cuenta que la fallecida querellante viva a menos de una cuadra del predio objeto de la querrela no tiene como justificar su aparente posesión y por que la extemporaneidad de la acción dado que las pruebas aportadas dentro del proceso demuestran que los actos de señor y dueño ejercidos por los querrellados llevaban más de un año, y la parte querellante afirma que desde 2007 no le cancelaban el supuesto canon y que no tiene la menor idea de cuando se dio el supuesto abandono y se desocupo el inmueble objeto del litigio por parte de sus presuntos inquilinos partiendo de las fechas aportadas por la parte querellante los seis meses del término que otorga la norma de impetrar la acción ya habían transcurrido.

APRECIACIÓN Y CALIFICACIÓN ERRÁTICA DE LAS PRUEBAS A LA LUZ DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS SUSTANCIALES Y PROCESALES

CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO Y LA LEGITIMACION EN CAUSA COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES JUDICIALES

El defecto fáctico es aquel que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se configura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.

EXTENSION DE GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO AL AMBITO ADMINISTRATIVO-No implica que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública

La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, sin embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia

que tiene para el orden constitucional la vigencia del debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario que la interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre ellos.

DEL ERROR DE ESTUDIO DE LA CONDUCTA Y LA PERTENENCIA PROBATORIA

Que el artículo 230 de la Carta Política, preceptúa que los funcionarios, en sus providencias solo están sujetos al imperio de la ley, igualmente el artículo 29 de la misma Carta, sanciona con nulidad de pleno derecho la prueba producida con violación del debido proceso, así mismo la Constitución Política de Colombia en su artículo cuarto preceptúa la Supremacía de la Constitución y obligación política de obedecerla. Del texto de estas normas constitucionales, se desprende la importancia de la prueba en los procesos, trascendencia que se refleja en la legislación que siempre ha rodeado de rigor la actividad probatoria, en el entendido de reconstruir el historial de la relación debatida en el juicio, es el único camino que permite dispensar la consecuencia jurídica pedida en la querrela.

El ordenamiento Constitucional se desarrolla entre otros en el artículo 164 del Código General del Proceso que impone la obligación de dictar su fallo con fundamento en las pruebas regular y oportunamente producidas en el juicio o incidente. Del mismo modo el artículo 167 ibidem establece que compete a las partes, demostrar el supuesto de hecho en que se fundamentan sus pretensiones. De acuerdo con lo anterior, quien inicia la acción debe demostrar que fue privado por VIAS DE HECHO de la relación material que tenía con el bien y con la acción policiva se busca restablecer o devolverle la TENENCIA MATERIAL a quien ha sido privado de ella, por lo que el accionante debe probar haber tenido materialmente la cosa al momento de sucederse los hechos.

En el caso en concreto nunca se probó la materialidad de la

DEFECTO FACTICO POR LA INDEBIDA CALIFICACION PROBATORIA Y PRACTICA DE PRUEBAS CON FALTA DE IMPARCIALIDAD

El defecto fáctico por LA INDEBIDA CALIFICACION PROBATORIA Y PRACTICA DE PRUEBAS CON FALTA DE IMPARCIALIDAD se presenta cuando el funcionario judicial omite la línea temporal en la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.

En el caso en concreto podemos observar que a pesar de los medios de defensa que otorga la norma policiva de la época se presentó el contrato de compraventa de derechos de posesión del cual soy el cesionario celebrado el 10 de enero de 2008 con su respectiva presentación personal ante notario, y admitir una acción por perturbación a la posesión fuera del termino demostrado que los supuestos hechos perturbatorios existieran hace notar la falta de imparcialidad e idoneidad en el estudio lineal en el espacio y el tiempo de las pruebas

DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO

Se puede incurrir en un defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando a pesar de existir elementos probatorios, el juez no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión.

DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO

El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.

DECISION SIN MOTIVACION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

JUEZ-Obligación de motivar las decisiones

La jurisprudencia constitucional acerca del deber de motivar las decisiones judiciales ha precisado que la exposición de las razones que llevaron a tomar una determinada decisión se erige como la mejor garantía para distinguir lo legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus decisiones cuáles son las razones de hecho y de derecho que están empleando para la resolución de un caso, porque en un Estado social y democrático de derecho están prohibidas las decisiones basadas en el poder puramente personal y es apenas lógico que los operadores judiciales estén obligados a exponer de manera clara cuáles son las bases lógicas y silogísticas de sus fallos como prenda del efectivo imperio de la legalidad en el seno de la sociedad y dado nuestro esquema legal la constitución es la norma superior y contine el esquema garante del cual se deben regir todas las actuaciones judiciales y administrativas o cualquiera que emane de la función pública.

CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia

Esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurar un defecto procedimental por "exceso ritual manifiesto" cuando: (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos; (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto; (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal; (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.

CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PROCESAL Y EL PAPEL DEL JUEZ-Operadores judiciales tienen el deber de corregir, mediante sus providencias, las fallas que impiden que la igualdad del proceso sea real y efectiva, que las partes intervinientes dentro de los procesos de cualquier naturaleza estén protegidas de manera equitativa y amparados dentro de los lineamientos normativos y constitucionales, dentro del principio de imparcialidad y deber de garante de los operadores de justicia y dirimientes de conflictos delegados por la norma.

DEBIDO PROCESO EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-En los trámites judiciales y en los trámites administrativos

La acción de tutela es el mecanismo idóneo cuando para verificar si un proceso de desalojo se efectuó en debida forma (es decir respetando el debido proceso), ello por cuanto de esa forma se certifica si existió o no una violación sistemática no solo posiblemente del derecho a una vivienda digna sino de los demás derechos que de ello se derivan. Cualquiera autoridad en la que recaiga el deber de ejecutar un desalojo forzoso, debe hacerlo con el respeto del debido proceso tanto en los trámites judiciales como los administrativos.

En el caso en concreto no solo se vulnera el debido proceso en el evidente actuar de la accionada si no que rompe el principio de igualdad e imparcialidad de la justicia las actuaciones que se surtieron en el proceso policivo objeto de la presente y lo actuado en el lo cual es violatorio de las garantías constitucionales mínimas dentro de un proceso.

En este tipo de procesos solo es posible solicitar el amparo respectivo cuando se está perturbando un bien, esto porque la posesión está compuesta de dos elementos animus y corpus, el primero, es la conciencia subjetiva de tener la cosa como suya, y el elemento objetivo o corpus, es detentar físicamente el bien que se posee cosa que la querellante ni su sucesora demostraron en el desarrollo del proceso.

SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

De manera respetuosa y dentro de lo expuesto a su despacho señor juez de conocimiento le solicito que por medio de la presente se protejan los derechos fundamentales a:

1. El debido proceso y se decrete la nulidad de todo el proceso por lo expuestos en la presente acción constitucional por la falta de competencia, legitimación en causa por activa y pasiva.
- Decretar la nulidad de todo lo actuado y fallado en la querrela bajo número de radicación 1532-2008, dado la vulneración expuesta y fallas normativas y constitucionales expuestas en la legitimación en causa y términos para iniciar la querrela objeto de la presente.

Fundamentos de derecho

- Sentencia 2014-02189 de 2019 Consejo de Estado
- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ARTICULOS 1,4.11,29,86, 230

PRUEBAS

Para apoyar mi petición solicito se corra traslado a la accionada y allegue los siguientes documentos:

1. solcito a su despacho decretar el traslado del expediente completo de la querrella que reposa en la inspección primera de 9E de Fontibón para su respectivo conocimiento dentro de la presente acción constitucional y corroborar los folios enunciados en el desarrollo del escrito de la presente.

NOTIFICACIONES

Al accionante recibiré notificaciones en las siguientes

CORREO ELECTRIONICO: aselegal.gonzalez@gmail.com,

dariogilbertoh@gmail.com

TELEFONO: 3192041788

A las accionadas

En la dirección oficial de ubicación de los respectivos despachos.

Del señor juez

DARÍO GILBERTO HERNANDEZ LLOREDA

Cc 79.124.496